



Entorno

Balance político del Paro Nacional en Colombia¹

Javier Calderón Castillo²

El presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República el pasado 20 de abril, con el que pretendía recaudar cerca de 8 mil millones de dólares bajo el argumento de enfrentar la crisis sanitaria. Esta propuesta fue rechazada mayoritariamente por diversos sectores políticos y sociales del país, provocando una ola de masivas protestas (Paro Nacional) en todas las ciudades de Colombia desde el 28 de abril; luego de cinco días de movilizaciones y represión policial (con dieciséis muertes confirmadas y muchas personas lesionadas), el gobierno se vio obligado, este 2 de mayo, a retirar el proyecto y convocar a un diálogo político.

La respuesta fue rechazada desde el primer momento por la mayoría de las bancadas parlamentarias, incluyendo algunos partidos oficialistas y otros que habían dado respaldo y gobernabilidad al pre-

sidente (como el Partido Liberal liderado por el expresidente Cesar Gaviria). Era una propuesta con sello de fracaso desde el comienzo.

1. A continuación se reproducen dos reportes analíticos del mismo autor, publicados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. El primero de ellos apareció el 03 de mayo de 2021 y el original puede leerse en <https://www.celag.org/balance-politico-del-paro-nacional-en-colombia/>

2. Javier Calderón Castillo es magíster en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

Atendiendo a múltiples intereses, estos sectores políticos y una buena parte de la sociedad civil mostraron su desacuerdo con la estructura de la reforma, e incluso con la misma idea de imponer más impuestos, en tanto ya desde la anterior reforma tributaria de Duque, de 2019, el malestar fue creciendo al compás de las enormes exenciones tributarias otorgadas a los grandes capitales, que se han beneficiado con más de 4 mil millones de dólares al año desde entonces.

El contexto social tampoco es favorable. Los altos índices de pobreza subieron considerablemente: los informes oficiales estiman la pobreza monetaria en el 42,5 % (21,1 millones de personas) y la pobreza extrema monetaria llega al 15,2 % (7,6 millones de personas), con el 14,5 % de desempleo, un 51,2 % de informalidad, y con serias dificultades para la vacunación (se han aplicado 5 millones de dosis, sin que Pfizer ni Sinovac aumenten el ritmo de entregas) con rebrotes de contagios que obligan a cierres parciales de comercios.

Todo ello acontece en un año preelectoral, en el que todas las formaciones políticas empiezan a pensar y actuar de cara a sus electores con mayor cálculo político.

Aunque restan diez meses para las elecciones parlamentarias y un año para las presidenciales, el gobierno ya tiene el sol a sus espaldas y no cuenta con suficiente fuerza como para sumar a la totalidad de las facciones de derecha en su agenda de gestión.

Efectos políticos del retiro de la reforma tributaria

El retiro del proyecto de reforma tributaria es una derrota política y simbólica para el uribismo y para el presidente Duque. A un año de las elecciones, dicho revés ahuyentará a sus aliados en el Congreso, con quienes logró estabilizar su gobernabilidad en 2019 pero que no se definen como oficialistas: el Partido Liberal del expresidente César Gaviria y Cambio Radical del ex vicepresidente de Santos, Germán Vargas Lleras. Estos partidos ya están pidiendo a sus cuotas ministeriales retirarse del gobierno, lo que significaría un escenario de ingobernabilidad al no lograr mayorías en el Congreso. Gaviria y Vargas Lleras, al rechazar la reforma y desligarse de Duque, pretenden canalizar el descontento social y ponerse una medalla de triunfo pensando en el 2022.

El ministro de Hacienda presentó su renuncia sin que aún haya sido aceptada por el presidente Duque. Se inicia una negociación entre partidos de la derecha promovida por el uribismo para lograr gobernabilidad; en ese marco, la oferta de ministerios puede dar lugar a una crisis ministerial que concluya con varios cambios.

La coalición del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro e Iván Cepeda, sale muy fortalecida. Sus parlamentarios lideraron la oposición a la reforma, y acertaron en su conexión con la ciudadanía y el respaldo al paro nacional. Sin embargo, esto puede ser un triunfalismo que conduzca a errores, como hacer equivalente el malestar social a una estructura de cambio.

La población ganó al salir masivamente a demostrar su inconformidad. Lo hizo por un cúmulo de demandas no tramitadas y por la desconexión del gobierno con las mayorías. El gobierno es percibido como una élite, y la reforma tributaria sólo terminó de decidir a grupos moderados, que estaban esperando el diálogo desde el gobierno. La movilización seguirá mientras el gobierno y el Congreso no den una respuesta social y pacífica.

La juventud ganó. Habló claro y está jugando un papel central en la disputa; en los próximos meses serán el centro de acciones estatales para criminalizar esa voluntad, en tanto el gobierno sabe que existe despolitización y que el miedo disuade. Quizás sea tarde para revertir ese sentido común antiuribista (principalmente) construido en la juventud colombiana. Personas que votaron por Uribe y Duque se declaran hoy antiuribistas, hartas de la corrupción y solidarias con la movilización. Hay una “repolitización” del país.

La situación le dio fuerza impulso a la izquierda y el progresismo, que tienen la responsabilidad de orientar cómo continúa la disputa. Si se orienta y administra ese descontento se verá reflejado en las elecciones y serán gobierno; si no lo hace bien, la inconformidad podría ser fagocitada por la antipolítica (voto blanco, nulo, todos son lo mismo, etc.).

El presidente Duque lanzó al Ejército a las calles el sábado 1 de mayo. Esa amenaza de militarización se devolvió rápido, pues 24 horas después se vio obligado a retirar la reforma. La gente no se amilanó y las fuerzas militares deben estar calculando para no cargar con el peso de un gobierno

tan debilitado. El escenario más probable es que estén pensando en una alternativa propia (no golpe, sino acuerdo con la derecha no uribista, en sintonía con los EE. UU. de Biden).

Quedan debilitados los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Cali, Iván Ospina. Son grandes perdedores porque apoyaron la reforma tributaria y no lograron evitar los abusos de la fuerza pública. En Cali, la cifra oficial es de siete personas muertas, hay personas desaparecidas y muchas heridas. Sólo tomaron distancia de Duque contra la militarización cuando el presidente decidió retirar la reforma.

Las movilizaciones sobrepasaron el poder de los medios tradicionales (*RCN* y el *Tiempo*, etc.), que desde el comienzo estigmatizaron el llamado a paro. Por otro lado, las redes sociales ganaron, son el centro de interacción, discusión e información (y desinformación).

Escenarios

Diálogo de la élite. El presidente Duque, al retirar la reforma tri-

butaria llamó al diálogo, pero no está claro si repetirá su libreto del 2019, cuando decidió acordar con Cambio Radical y el Partido Liberal -junto con las cámaras empresariales- y nunca se reunió con representantes del paro, ni sindicales, ni sociales. Es el escenario más probable, pero las fuerzas políticas de la derecha están pensando en las elecciones del 2022 y podrían dejar sin margen al uribismo para gobernar. En ese sentido, las privatizaciones de las pocas empresas estatales que quedan serán la salida para financiar el último año de gobierno.

El otro escenario es de diálogo nacional con todos los sectores. Lo que implica reconocer una agenda de demandas más amplias que la tributaria, que incluyen la política de paz y reivindicaciones sectoriales. Es un escenario con baja probabilidad, pero podría ser la salida para descomprimir la rabia y terminar el mandato con el diálogo social como legado.

Colombia a 12 días del paro nacional³

Javier Calderón Castillo

1. En las calles se empieza a sentir el agotamiento luego de 12 días de represión, apoyada por un bombardeo de información interna para deslegitimar las protestas. Quedan los sectores organizados (en especial rurales) en algunos puntos de bloqueo, un sector de camioneros y en algunos barrios de Cali, Pereira y Bogotá, que fueron blanco de los feroces ataques policiales.
2. La no resolución de ninguna de las demandas, salvo el retiro de la Reforma Tributaria, la militarización y el espectáculo de un diálogo entre las élites iniciado por Duque, indican que las demandas quedarán aplazadas, con otra herida abierta producto de las muertes y vejámenes en contra de las y los jóvenes. Quedan las necesidades y la indignación.
3. Duque está encerrado en su palacio, en una crisis política profunda, confiando en que todo se apagará lentamente, rodeado por un equipo que apuesta al marketing y no a la política. No tienen nada para hablar, no quieren corregir el rumbo, piensan que lo están haciendo bien, porque siempre lo han hecho de la misma manera. Quieren resolver la situación por la fuerza y exigiendo respaldo de clase a empresarios y políticos de derechas.
4. El uribismo sube un escalón en su retórica militarista. Al mejor estilo trumpista, y siguiendo al pie de la letra al estratega neonazi chileno Alexis López, el ex-presidente Uribe desde Twitter está ordenando a las fuerzas militares disparar en las protestas, ordenó a Duque militarizar las ciudades, y desde el viernes 7 de mayo, está convocando a

3. Publicado el 10 de mayo de 2021. Tomado de <https://www.celag.org/colombia-a-12-dias-del-paro-nacional/>

los civiles a salir armados para “defender” la propiedad privada. Esta inflando un sentimiento racista y elitista que ya tuvo efecto: los medios ayer titulaban “choques entre ciudadanos e indígenas” como si los indígenas no fueran ciudadanos; y grupos paramilitares en pleno día dispararon contra la minga indígena en Cali, con un saldo de ocho personas heridas. Uribe está convocando a militares y paramilitares a matar civiles y controlar la situación con “autoridad”.

5. El Comité Nacional del Paro está dividido y no representa a todos los sectores movilizados. Hay tres facciones, una liderada por el MOIR (de la Coalición Esperanza) que insta a negociar (no se sabe qué) con el gobierno, otra liderada por la extrema izquierda que pide mantenerse hasta que caiga Duque (es minoritaria), y otra del Pacto Histórico que insta a establecer un diálogo sin negociación para bajar la tensión y la agresión militar, y administre la protesta durante todo el año, sabiendo que el escenario de disputa será electoral en 2022.
6. La Coalición de la Esperanza, liderada por Fajardo, se reunió con Duque y le dio una foto,

pero salieron a decir que el presidente no escucha. Hubo rechazo a esa visita, se les vio tratando de representar las movilizaciones. No salió bien para ellos. Le dieron algo de aire a Duque, que no supo o no quiso administrar.

7. La Coalición del Pacto Histórico está denunciando la militarización, Gustavo Petro está llamando a la calma, a no escalar la violencia, por considerar que fortalece el relato uribista. El precandidato presidencial y senador ha sido más que prudente, desde la derecha lo provocan a hablar, porque lo pretenden culpar de la violencia. Está en disputa quien canaliza el descontento y quién o quiénes son los responsables de la crisis.
8. César Gaviria, y su Partido Liberal, están anunciando de vuelta el apoyo a Duque. Y Vargas Lleras, con Cambio Radical, se atrinchera en la reforma a la salud que cursa en el Congreso, que termina de entregar todos los fondos públicos de la salud a las empresas privadas. Todo indica que se abroquelan en el gobierno, a cambio de administrar y de apropiarse de porciones de los recursos estatales. Duque está repartiendo el pre-

supuesto estatal para llegar al 2022.

9. El gobierno está presionado por la comunidad internacional, su respuesta es reactiva, se centra en atacar a todos los que le exigen detener la represión. Expulsó al primer secretario de la embajada de Cuba, cuestionó a la ONU, respondió de forma burda el pedido de cese a las hostilidades de Alberto Fernández. La gravedad de las violaciones a los DD.HH. es tal que hasta la OEA se vio obligada a pronunciarse, así lo haya hecho de forma ambigua. Es tal la presión que la canciller, Claudia Blum, envió su renuncia el viernes 7, aunque no ha sido confirmada, pero sus copartidarios uribistas no salieron a respaldarla.
10. Preocupa el papel de los militares, que siguieron adelante las actuaciones sugeridas por

Uribe. Por momentos parece que Duque no tiene el control de las fuerzas militares. No hay autogolpe, ni golpe, pero el protagonismo de los militares en esta crisis tendrá repercusión en el proceso electoral. Hay quienes se preguntan cómo desactivarlas en un eventual gobierno de izquierdas.

11. Al viernes 7 de mayo, los datos de violaciones de derechos humanos relevados por las ONG Indepaz y Temblores, cuyas fuentes son la Oficina Permanente de la ONU en Colombia, el CICR y la Defensoría del Pueblo, se resumen en las siguientes cifras: 47 personas asesinadas (10 muertes sin confirmar); 12 casos de violencia sexual; 548 desaparecidas/os; 963 detenciones arbitrarias; 278 personas heridas, 27 con pérdida ocular.